

Inseguridad en BCS, la estrategia equívoca



FOTOS: Luis Roldán.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El estandarte ofertorio del actual **Gobernador de BCS**, para alcanzar el triunfo electoral, se recargó en la promesa de acabar *“rapidito”* con el problema de la inseguridad. Aseguró *“saber cómo”* y se jactó de que a él *“no le temblaría la mano”*.

Lo cierto es que todo resultó una falsa promesa de campaña. Una más de las tantas que nos han endilgado desde que la democracia nacional fue secuestrada por el sistema de franquicias partidistas que permiten el control del poder al grupo entronizado, mediante la simulación y el engaño.

También te podría interesar [Criterios de oportunidad en el](#)

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Pese a ser sólo una falsa promesa más, resultó más ofensiva su natural afrenta, al constatar que lejos de mejorar el **problema de la inseguridad**, a partir de la actual administración, se han disparado los índices de criminalidad y la escalada de violencia no encuentra precedente histórico.

Evidentemente, no sabe cómo, le tiembla más que la mano, y no tiene la voluntad política ni la determinación necesarias para enfrentar con éxito la problemática, la grave problemática que hoy tiene a la sociedad sudcaliforniana padeciendo una constante inseguridad que lejos de disminuir, parece acentuarse en un cruento consecutivo, que no hay promesa de "mejor futuro" que tranquilice a los habitantes de la entidad.

A la excusa, el pretexto, la simulación y el ocultamiento, se suma el reparto de culpas. Todos somos responsables. Todos, menos el gobierno en turno.



Y en ese juego perverso de negación, se satura el suministro de notas oficiales en los medios afines al gobierno estatal, de *"buenas noticias"*, que hablan de bonanza económica, incremento de fuentes de empleo y otros importantes logros, reales o imaginarios, que en autoría meritoria se adjudica el gobierno del *"mejor futuro"*. El esfuerzo propagandístico es costoso, pues los jilguerillos encargados de difundir los *"logros oficiales"* cobran indefectiblemente sus aportes en la rentable labor de difundir los méritos del aparato gubernamental.

Lo único cierto es que no existe un plan concreto de acción, ni a corto ni a mediano plazo, tendiente a frenar eficazmente **la inseguridad** que nos agobia. No existe coordinación entre las fuerzas del orden, ni estrategia que a partir de inteligencia aplicada, nos brinde un plan adecuado y eficaz de prevención, disuasión, contención, persecución y sanción del delito.

No contamos, pese a lo grave de la situación, con un solo **policía** de carrera al frente de las corporaciones policiales. Se improvisa con amigos, conocidos, arrimados y endosados. En procuración de justicia se insiste en sostener en el empeño al petulante importado que ha dejado claro en el tiempo que lleva en el cargo, que lejos de contribuir a solucionar la problemática, su incompetencia lo ha vuelto parte de la misma.

Se ha recurrido a la Federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses, que a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.

Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el Ejecutivo Estatal despojarse de su arrogancia y aceptar que su *"medicina"* resultó charlatanería, por más que *"aumente la dosis"*.



*El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009-2010, sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de **la violencia y el delito**, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.*

Entre las deficiencias institucionales, el **Instituto Interamericano de Derechos Humanos** identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.

Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder. Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden.

Poner al frente de las corporaciones a policías de carrera,

expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo.